



República del Ecuador
TRIBUNAL CONTENCIOSO
ELECTORAL

Aprobada en sesión del Pleno
de 28 de abril de 2009, con ob-
servaciones.

R. Ortiz
Secretaría General

ACTA No. 0048 – TCE – 2009

**ACTA DE LA SESION DEL PLENO DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ELECTORAL
CORRESPONDIENTE AL MARTES 7 DE ABRIL DEL 2009.**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del dos mil nueve, siendo las 16H00, sesiona el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, con la Presidencia de la Dra. Tania Lizbeth Arias Manzano, y la asistencia de las señoras y señores miembros principales Dra. Ximena Verónica Endara Osejo, Vicepresidenta, Dra. Carmina Alexandra Cantos Molina, Dr. Jorge Aurelio Moreno Yanes y Dr. Arturo Javier Donoso Castellón.

Actúa en la Secretaría su titular doctor Richard Ortiz Ortiz.

Se constata el quórum reglamentario.

El señor Arturo Donoso propone que en la presente sesión se traten únicamente los puntos del orden del día que tienen relación a asuntos jurisdiccionales; y, que los puntos relacionados a temas administrativos sean tratados en una sesión extraordinaria que se convoque para el miércoles 8 de marzo del 2009, a las 11H00.

Al efecto, el Pleno del Organismo aprueba por unanimidad la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN No 273-07-04-2009: Aprobar que en la presente sesión se traten únicamente los puntos del orden del día que tienen relación a asuntos jurisdiccionales; y, que los puntos relacionados a temas administrativos sean tratados en una sesión extraordinaria que se convoque para el miércoles 8 de marzo del 2009, a las 11H00.

Se aprueba el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

PUNTO UNICO.-

CONOCIMIENTO DEL MEMORANDO NO 00044-TCE-V-XEO, SUSCRITO POR LA DOCTORA XIMENA ENDARA, VICEPRESIDENTA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL; Y MEMORANDO NO. 0062-TCE-AJDC-2009, SUSCRITO POR EL DR. ARTURO DONOSO, JUEZ DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.-



Se da lectura de un memorando de fecha 6 de abril del 2009, suscrito por la Dra. Ximena Endara Osejo, Vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, mediante el cual solicita se incluya como punto en el orden del día de la sesión del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, el procedimiento utilizado en el recurso contencioso electoral ingresado con el No. 082-2009, que por sorteo, le ha correspondido sustanciar.

La señora Dra. Ximena Endara da a conocer que en el trámite del recurso contencioso electoral, ochenta y dos, cuando las partes firmaron el acta de la diligencia se procedió a pasar a los respectivos despachos de los jueces, por medio de los asesores se comunicó que no era el procedimiento más ágil y que no debían constar el nombre de todos los jueces por cuanto únicamente lo había estado sustanciando su despacho, por lo que solicitó que se incluya como punto del orden del día este tema, para clarificarlo y adoptar una resolución, de igual manera, suspendió la redacción de la sentencia porque podrían surgir nuevos elementos en el proceso.

El señor Dr. Arturo Donoso expresa que están tratando un tema muy delicado que es necesario dilucidar, vinculado con decisiones del Consejo Nacional Electoral respecto de temas estrictamente del gasto electoral de un movimiento político, las cuales han sido apeladas ante este Tribunal, por tanto las dos comunicaciones tienen relación con el tema que se encuentran tratando. Si bien los comentarios que se han emitido a través de los medios de comunicación respecto al cumplimiento de las funciones del Tribunal Contencioso Electoral, sin que se trate de anticipación de criterios y desde el estudio de las normas constitucionales, legales y las normas dictadas por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral es un organismo de carácter estrictamente administrativo del proceso electoral, por lo que las sanciones que puede imponer son únicamente administrativas respecto de los organismos electorales, todas las demás y que tienen que ver con sanciones en el proceso electoral en todos los ámbitos, así lo dice en la norma constitucional, es atribución exclusiva de este Tribunal. Manifiesta que mantiene una inquietud con respecto a la inspección judicial y que tenía que ver con las pruebas solicitadas por los sujetos, referentes a una infracción al gasto electoral, directamente relacionado con las infracciones que este Tribunal que de acuerdo a las normas de trámite le corresponde a un juez la sustanciación en primera instancia, si hay apelación por sorteo a tres jueces que deciden en segunda y definitiva instancia, por lo tanto cuando se realizó la diligencia el Tribunal no estaba completo, si era un tema de que el Tribunal esté, pero además el Tribunal no debía estar en Pleno, debía estar únicamente el juez de sustanciación, si habría apelación todos, por lo que los otros jueces no pueden estar presentes porque pueden salir en el sorteo y a ellos les corresponde analizar la prueba, frente a esto viene la vinculación con la que la opinión pública está discutiendo, lo que hacen o no, porque lo que se dice es que el Tribunal Contencioso Electoral en un mes no ha sido capaz de resolver



el tema, por lo tanto el Tribunal con toda ponderación debe explicar claramente cuáles son sus atribuciones y poner punto final a este debate.

La señora Dra. Ximena Endara recuerda que el caso viene con un escrito de apelación de la acción, el cual no ha sido enviado por el CNE, era un sujeto político que quería impugnar una resolución del Pleno, frente a esto se mantuvo una reunión e incluso en un momento se acordó inhibirse de conocer, por tanto se tomó la resolución de tramitar esta petición en base al artículo cien, que abre las posibilidades para que los ciudadanos puedan plantear otras acciones, allí se determina que deban tramitar como primera instancia el Pleno, así procedieron, es la primera instancia del recurso de queja y en la parte donde dice la Presidenta, se entenderá que es el Pleno, eso es lo que hicieron, dentro de ese procedimiento se le encargó la sustanciación porque no podían estar los cinco jueces haciendo todas las providencias, en ese sentido, se abrió la prueba, se presentaron todos los documentos, pero el problema es qué van hacer frente a este proceso al cual ya le han dado este trámite, sin embargo, si se ocuparía en ésta o en otra causa el artículo ochenta y seis, siempre será el Consejo Nacional Electoral el que deba remitir el expediente, pero en la Constitución hay una norma que dice el Tribunal Contencioso Electoral va a conocer las impugnaciones que se hagan a todas las resoluciones del Pleno del CNE y sus organismos desconcentrados, siendo ese el razonamiento, en el caso que se decida tramitarlo por el artículo ochenta y seis, tendrían que rechazar el recurso porque no ha venido del CNE, además llegó fuera de los plazos desde que se conoció la resolución.

El señor Dr. Arturo Donoso señala que son dos temas: primero, cuál es la materia que juzgan, si existe infracción o no, refiriéndose a una multa que es una sanción por una infracción electoral, eso no es atribución del Consejo nacional Electoral, debió limitarse a formar un expediente remitirlo al Tribunal Contencioso Electoral; segundo, un juez tiene competencia y jurisdicción que nace de la Constitución y la Ley, es un Tribunal con rango constitucional y en el ámbito de sus competencias no está juzgar un hecho que extralimita los campos de acción de quién impuso una sanción, mucho más grave y puede ser que el Tribunal haya pensado que ese era el camino pero el juez tiene la obligación de rectificar el procedimiento dentro de lo que le compete, no es cuestión de llevar el procedimiento hasta el final, si el juez en cualquier momento descubre o determina que algo no se sujeta al trámite constitucional y legal, tiene que corregir, peor si existe un tema de competencia sobre instituciones jurisdiccionales.

El señor Dr. Jorge Moreno manifiesta que este es un problema de los tantos que han tenido y de los que vendrán, viven bajo un Régimen de Transición en el que obviamente la única normativa clara y concreta es la Constitución de la República, pero si se observa la Ley Orgánica de Elecciones, Partidos Políticos y la del Control del Gasto y de la Propaganda Electoral, cada una en



el ámbito de sus competencias tienen muchas contradicciones con la Constitución y por ello no es posible aplicarlas en su totalidad, fue el Constituyente quien les facultó para que en el ámbito de sus competencias puedan justamente dictar las normas que sean indispensables a efectos de viabilizar este proceso electoral y obviamente bajo esa premisa tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral dictaron normas que tienen un rango de ley, hecho que lo ha venido sosteniendo permanentemente en el Pleno, ahora bien si revisan la Ley de Control del Gasto y la Propaganda Electoral, no encontrarán una sola disposición que haga referencia a todos los problemas que este momento estamos pasando, es decir, los sujetos políticos en cuanto a la propaganda y publicidad electoral que se va generando no tienen norma alguna en la Ley actual, por ahí una que otra que hace alusión probablemente a la infracción de los poderes públicos de su prohibición expresa a que participen en la contienda electoral de manera directa y mucho peor para que utilicen la infraestructura estatal o recursos económicos, estableciendo como sanción la revocatoria del mandato en caso de los dignatarios de elección popular o destitución del cargo a los servidores y servidoras públicos, nada más, o tal vez en el asunto de los medios de comunicación donde en el caso de la reincidencia la competencia pasa al CONARTEL para que sea este quien proceda a establecer la sanción que corresponda, entonces son normas contradictorias y que no van acorde con la vigente Constitución, caso similar es la Ley de Partidos Políticos donde los partidos políticos son entidades de derecho privado, pero la vigente Constitución cambia radicalmente este concepto al establecer que los partidos políticos y movimientos son entidades públicas no institucionales y ahí viene la diferencia y el control que puede tener evidentemente el Estado porque de hecho lo va a tener, así mismo, la vigente Constitución determina que la Función Electoral está conformada por dos órganos, uno administrativo y uno jurisdiccional, donde las competencias están claramente delimitadas y donde se establece que en el ámbito de las sanciones el único órgano competente es el Tribunal Contencioso Electoral, mientras no tengan una norma secundaria, esa competencia es privativa y exclusiva del Tribunal Contencioso Electoral, vista así las cosas han desarreglado una normativa en el ámbito del control y del gasto electoral casi diría rayando específicamente al asunto del control de las cuentas, no así este tema de la publicidad y la propaganda que se genera en el proceso de campaña electoral, ahí han encontrado justamente un tropiezo, porque nos ha llegado directamente un recurso de apelación a una resolución del Consejo Nacional Electoral, como no podía ser de otra manera al ser garantistas de derechos le han dado trámite con el procedimiento que lo encuentran en las normas dictadas por el Tribunal para viabilizar este tipo de procesos en materia de publicidad y control de gasto electoral, así mismo estarán a lo que determina la Ley de Control y Gasto de la propaganda Electoral en todo lo que no contravenga a la Constitución. El Reglamento de Trámites les da dos alternativas: una, cuando se realicen por parte de los órganos electorales desconcentrados o el Consejo Nacional Electoral el control



del gasto, propaganda y publicidad electoral, encontrando una presunta inobservancia del sujeto político o de cualquier otra persona, lo que podría potencialmente estar inmerso en una sanción, entonces como dice el Dr. Arturo Donoso, tendrán que abrir un expediente para establecer o emitir un juicio de valor y remitirlo para que internamente se proceda al sorteo y determinar a que juez le corresponde tramitarlo y resolverlo, debiendo para el efecto notificar a los presuntos infractores con la presunta inobservancia o vulneración de la normas electorales del gasto y la propaganda electoral, sin embargo, el artículo 86, no dice absolutamente nada, allí estaríamos ante la infracción y no ante la sanción, allí viene el problema de la decisión del Consejo Nacional Electoral que según el sujeto que interpone el recurso de apelación, porque no pueden anticipar criterio, sostiene que le han sancionado y que esa no es competencia del Consejo Nacional Electoral, volviéndose inviable dar trámite conforme lo establece el artículo 86, ahí se encuentran ante la situación de qué hacer en estos casos, tienen que buscar que norma aplicar, el artículo 100 señala "otras acciones que los ciudadanos y ciudadanas, sujetos u organizaciones políticas planteen para conocimiento y resolución del Tribunal Contencioso Electoral", pero el sujeto político propone un recurso de apelación porque se han vulnerado sus derechos y que el Consejo Nacional Electoral ha extralimitado sus funciones al haberlos sancionado, entonces no pueden enmarcarse en el artículo 86, es la única cabida a este tipo de acciones que vengan vía recursos de apelación, porque otra cosa muy distinta es que les envíen un expediente para un potencial juzgamiento de una infracción que pueda tener una sanción, pero acá lo que dice el apelante es que le sancionaron, es decir que pasaron de la infracción a la sanción en el órgano administrativo, personalmente considera que es el único mecanismo procedimental que tienen.

La señora Presidenta solicita que la discusión sea más general a propósito del tema, respecto de cuál es la vía procesal que debe adoptar el Tribunal cuando llegan apelaciones a las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral, recurso electoral llámese como se llame, más cuando en múltiples sentencias han aplicado el criterio de formalidad y ahí le parece que la vía para tramitar un proceso judicial es aquella que corresponde a la pretensión planteada por el actor, sea este ciudadano, ciudadana u organización que plantee y que todos están obligados como jueces a no dejar en indefensión a los sujetos políticos o ciudadanos que acuden a impugnar las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, que es una de sus atribuciones de acuerdo al artículo 221 de la Constitución, en estos casos, les corresponde ver cuál es la vía procesal, la pretensión del actor y cuál es el recurso por el cual pretende que se le restaure el derecho que cree se le ha vulnerado a través de una resolución que de acuerdo a lo que pueda alegar no se ha dado el debido proceso o incompetencia como en el caso que se analiza. Le parece que el primer acuerdo al que deberían llegar es cómo operar o cuál es la vía procesal



que les corresponde adoptar para cada caso, ahí está la respuesta para este caso en particular.

El señor Dr. Arturo Donoso manifiesta que: primero, respecto a la diligencia que se efectuó en el Consejo Nacional Electoral, el acta deberá reunir los hechos precisos y la hora en que los jueces se fueron integrando a la diligencia, de esa manera se trasparenta la actuación del Tribunal; y, segundo, el procedimiento por el cual se correspondió sustanciar la causa por sorteo a la señora Vicepresidenta, haga un análisis del tema y prepare de acuerdo al estado de la causa la decisión que considere aplicable de acuerdo a las normas como jueza, así se tendrá claridad sobre el tema y el Tribunal podrá reunirse para adoptar una sola decisión, de esa manera podrán salir de esta causa que ha originado comentarios de los medios de comunicación y de la opinión pública que lo que hacen es tratar de dañar la imagen del Tribunal.

La señora Dra. Ximena Endara manifiesta que las decisiones de cómo ir encausando la garantía de los derechos es una preocupación, son un Tribunal garante de leyes y por ello no pueden dejar en la indefensión a nadie, si alguien no está de acuerdo con la resolución que se adoptó hay que darle la atención que solicita, las normas del Tribunal no determina cuáles son los procedimientos que deben darse en la realidad, cuentan con el artículo 100, el cual dilata el plazo en el cual se puede tomar la resolución, porque son cinco días para presentar el recurso, luego en el caso de que deba completar el expediente, posteriormente siete días para la prueba, eso es lo que dilata el trámite porque existe un período de espera para las pruebas, además se aceptan todos los recursos o escritos que plantean las partes y deben ser analizados o si no es pertinente hacerlo, por su parte recogerá las observaciones establecidas en el acta de la diligencia realizada, la versión textual por lo delicado del trámite la entregada a la Secretaría General, solicita a los señores jueces estén disponibles en la mañana para hacerles firmar y de esa manera llamar a las dos partes y para horas de la tarde presentará su ponencia definitiva a fin de emitir la sentencia a más tardar hasta el día jueves.

La señora Presidenta expresa que la responsabilidad del Tribunal Contencioso Electoral es garantizar el derecho de los sujetos políticos, llevar adelante el proceso electoral en cada uno de los ámbitos de su competencia, el que eventualmente puedan llegar a acuerdos y/o reformar o interpretar las normas para el proceso electoral y de esa manera resolver de modo más ágil los procesos sin afectar los derechos de los sujetos políticos, tanto en las apelaciones como en las denuncias que puedan llegar con la finalidad de restaurar derechos vulnerados por resoluciones equivocadas del CNE o garantizar la igualdad de condiciones de los sujetos políticos que están en campaña electoral.



República del Ecuador
TRIBUNAL CONTENCIOSO
ELECTORAL

Secretaría General

Por haberse agotado los puntos constantes en el orden del día, la señora Presidenta agradece la presencia de los señores miembros del Tribunal Contencioso Electoral y la clausura siendo las 18H10.

Dra. Tania Arias Manzano
**PRESIDENTA DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ELECTORAL**

Dr. Richard Ortiz Ortiz
SECRETARIO GENERAL